

Evaluación del Impacto Socioeconómico de la COVID-19 en las Personas Desplazadas por la Fuerza

Resumen Temático Núm. 5: el caso de México *

Información clave

- México es cada vez más un país de destino para personas refugiadas y migrantes, más que un país de origen o de tránsito. En 2021, hubo un número récord de solicitudes de asilo, 131.448, principalmente provenientes de Honduras y El Salvador, pero también de Haití y Cuba, entre otros. Además, el número de personas venezolanas desplazadas en el exterior que comenzaron a llegar en 2018 supera los 60.000.
- Los datos de dos rondas de una encuesta telefónica realizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y *Innovations for Poverty Action* (IPA, siglas del inglés) entre marzo y agosto de 2021, comparable a una encuesta similar efectuada por el Banco Mundial sobre la población nacional, proporcionan información sobre cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado la salud, los medios de vida y la vulnerabilidad general de las personas de interés (PoC, por sus siglas en inglés) del ACNUR, así como su comunidad de acogida más cercana.¹
- Para septiembre de 2021, alrededor del 15% de los hogares encuestados han experimentado un diagnóstico de COVID-19. Además, el 25 % de las personas encuestadas reporta haber recibido una vacuna contra la COVID-19, sin embargo, el número de PoC encuestadas que han sido vacunadas es mucho menor en comparación con la comunidad de acogida.
- El impacto económico de la pandemia ha sido grave: el 68% de todas las personas encuestadas reportaron ingresos familiares más bajos en la primera ronda en comparación con su situación previa a la COVID-19. Además, la inseguridad financiera sigue siendo pronunciada: de la población encuestada, el 56% de las PoC y el 42 % de la comunidad de acogida dijeron que se vieron obligadas a agotar sus ahorros o a depender de otras personas para satisfacer sus necesidades diarias y 3 de cada 4 mencionaron que no tienen cuentas de ahorro bancarias ni móviles.
- La inseguridad alimentaria sigue siendo alta, particularmente para las personas refugiadas y solicitantes de asilo hondureñas y salvadoreñas. Cerca del 57 % reportó que una persona adulta se saltó una comida en la última semana en la segunda ronda en comparación con solo el 20% de las personas nacionales en la ronda final de la encuesta del Banco Mundial en 2020.
- A pesar de estas necesidades prevalecientes, la ayuda alimentaria y en efectivo a las PoC se redujo entre febrero y septiembre de 2021. Del mismo modo, las solicitudes de apoyo estatal son menos comunes en la segunda ronda, de las cuales se rechaza el 70% y la mayoría de las demás están pendientes.

*Este informe fue elaborado de manera conjunta por Craig Loschmann, Theresa Beltramo y Jed Fix del ACNUR. Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del ACNUR.

¹ El término '[personas de interés](#)' (PoC, por sus siglas en inglés) del ACNUR incluye, por lo general, a las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, apátridas y otras en situación similar a la de las personas refugiadas, como los venezolanos desplazados en el extranjero.

- Los hogares hondureños y salvadoreños están notablemente peor en comparación con la población venezolana y la comunidad de acogida según se evidencia en la mayoría de las medidas estadísticas, lo que indica que, en términos generales, tienen un peor perfil socioeconómico y se concentran en una zona generalmente más marginada, como el sur de México.

La pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias devastadoras en todo el mundo. En los países de ingresos bajos y medios donde vive la mayoría de las personas refugiadas, la pandemia ha aumentado la carga de los gobiernos de acogida y las partes interesadas que trabajan con ellos para abordar los niveles sin precedentes de desplazamiento forzado.² Si bien el virus en sí no discrimina, se cree que sus impactos socioeconómicos afectan a las personas desplazadas por la fuerza de manera desproporcionada debido a sus vulnerabilidades preexistentes y a circunstancias a menudo precarias.

Los estudios realizados por el *World Bank-UNHCR Joint Data Center on Forced Displacement* (JDC), el *Center for Global Development* y el *Norwegian Refugee Council* destacan los graves efectos de la pandemia en las personas desplazadas por la fuerza, muchas de las cuales trabajan en sectores más vulnerables a los *shocks* económicos y con acceso limitado a los mercados laborales formales, los servicios de salud y educación, y los sistemas de protección social.³ A pesar de estos esfuerzos, todavía hay relativamente poca evidencia empírica sobre cómo las personas refugiadas y otras personas de interés del ACNUR se han visto afectadas por la pandemia, particularmente en diversos contextos en las Américas. Esto es aún más relevante teniendo en cuenta que la región de América Latina y el Caribe ha sido posiblemente la más afectada del mundo, con 18.5% de los casos de COVID-19 y 30.3% de las muertes a nivel mundial a octubre de 2021, pese a representar solo el 8.4% del total de la población mundial.⁴

Este informe – [que se suma a otros en la serie](#) – analiza el impacto de la COVID-19 en las personas de interés del ACNUR en México a partir de los datos socioeconómicos obtenidos recientemente de una encuesta telefónica de alta frecuencia. Si bien no es exhaustivo, el objetivo es proporcionar evidencia de cómo esta población está enfrentando la crisis en comparación con la población nacional y cómo sus condiciones evolucionan con el tiempo, siempre que sea posible. El estudio se enfoca principalmente en los temas identificados como prioritarios por las operaciones nacionales y regionales del ACNUR, incluyendo el impacto de la pandemia en el acceso a los servicios esenciales, los medios de vida y la inseguridad alimentaria. Sin embargo, en primer lugar, se presenta un breve contexto de las tendencias de desplazamiento en México en los últimos años, así como la experiencia general del país con la pandemia y la respuesta operacional del ACNUR.

Desplazamiento, COVID-19 y la respuesta de ACNUR en México

La posición geográfica de México y el PIB per cápita, que es relativamente más alto en comparación con sus países vecinos, ha generado históricamente dinámicas complejas de migración y desplazamiento, inclusive como país de origen y de tránsito para las personas migrantes que viajan a los Estados Unidos. No obstante, en los últimos años, se le considera cada vez más como un país de destino más que de tránsito, y un mayor número de personas, principalmente de Centroamérica, manifiesta su intención de quedarse y solicitar protección

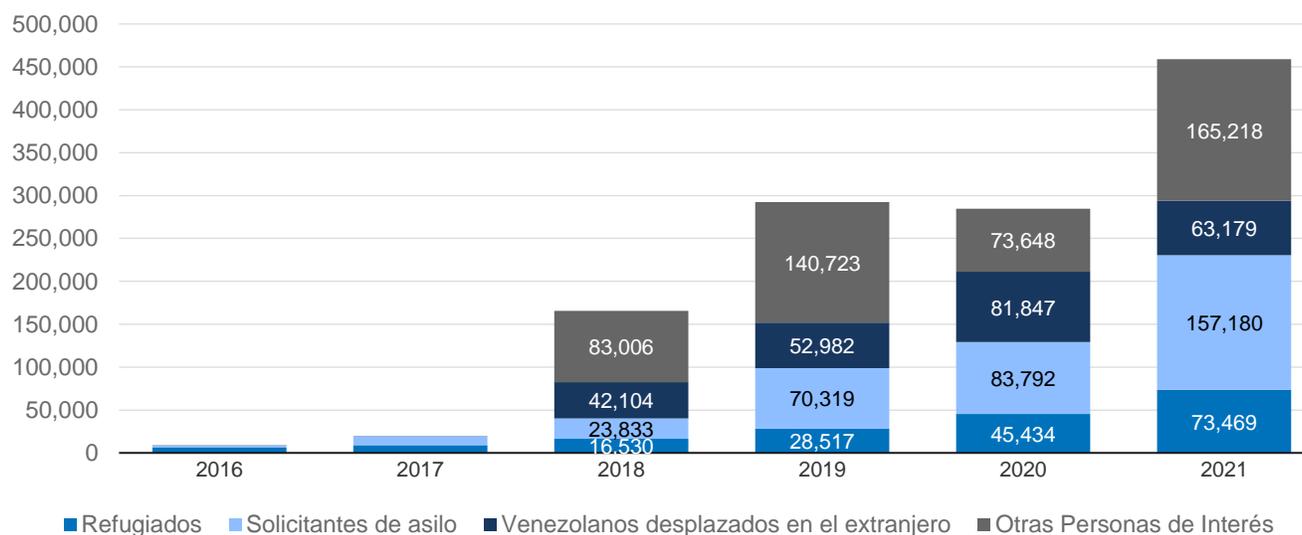
² ACNUR (2021). [Mid-Year Trends. Forced Displacement in 2021](#) (disponible en inglés).

³ Tanner, J., et al. (2021). [Answering the Call: Forcibly Displaced during the Pandemic](#) (disponible en inglés). Dempster, H., et al. (2020). [Locked Down and Left Behind: The Impact of COVID-19 on Refugees' Economic Inclusion](#) (disponible en inglés) y; Gorevan, D. (2020). [Downward Spiral: the economic impact of COVID-19 on refugees and displaced people](#) (disponible en inglés).

⁴ CEPAL y UNICEF (2021). [Pandemia de COVID-19: el derecho a estudiar de las niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe.](#)

internacional, tal como se refleja en las cifras oficiales de población del ACNUR. A finales de 2021, México albergaba a 459.046 personas de interés, incluidas 73.469 refugiadas, 157.180 solicitantes de asilo y 63.179 venezolanas desplazadas en el extranjero (gráfico 1). Se espera que continúe el crecimiento considerable en la población de PoC. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reportó un número récord de personas (131.448) que solicitaron asilo entre enero y diciembre de 2021, cuya resolución sigue pendiente.⁵

Gráfico 1 Personas de Interés en México



Source: © [ACNUR](#).

ACNUR México, en su respuesta a la COVID-19, ha identificado cuatro prioridades para abordar los principales riesgos de protección que enfrentan las personas de interés. Primero, el equipo nacional ha fortalecido el espacio de protección, que incluye un mayor acceso y eficiencia del sistema de asilo, así como la participación de la comunidad. En segundo lugar, han ampliado los programas de asistencia en efectivo para las familias refugiadas más vulnerables que experimentan crisis económicas y necesidades especiales de protección. En tercer lugar, han mejorado la preparación de los albergues para prevenir la transmisión del coronavirus de persona a persona y darles apoyo a través de personal adicional y la provisión de suministros de artículos de higiene y saneamiento para varios meses. Por último, se ha prestado asistencia a los hospitales municipales a través de la provisión de equipo médico y de protección personal, incluidas cinco ambulancias, para permitir la prestación continua de servicios de salud para las personas de interés del ACNUR y las comunidades locales.

Inclusive antes de la pandemia, una parte central de la respuesta de ACNUR en México al creciente número de llegadas ha sido la reubicación voluntaria de personas refugiadas y solicitantes de asilo, población venezolana desplazada en el extranjero y otras personas de interés, desde las sobrecargadas áreas fronterizas del sur hacia comunidades en el centro y norte de México. Desde 2016, este programa de reubicación e integración local ha ayudado a más de 15.000 personas a trasladarse a una de las ocho comunidades que tienen una mayor demanda de trabajadores y una mejor capacidad para integrar a las personas a los sistemas de educación y salud. Actualmente, más de 200 empresas nacionales y multinacionales emplean a personas refugiadas como parte del programa, y de 2016 a 2020, 8.151 personas reubicadas fueron empleadas en la economía formal.⁶

⁵ Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, [Solicitudes \(preliminares\), datos al cierre de diciembre de 2021](#).

⁶ ACNUR (2021). [2020 Principales resultados ACNUR México](#).

Además de la reubicación, abogar por una mayor inclusión social y económica es una prioridad para ACNUR en México. Una parte esencial de esto es la inclusión en los servicios y programas públicos, incluidos el sistema de salud, el sistema educativo y el registro nacional de población, así como una mayor inclusión financiera. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo también están mejor preparadas para el mercado laboral mexicano a través de intervenciones específicas que tienen como objetivo mejorar sus habilidades y empleabilidad, y facilitar el acceso a la información del mercado y las redes sociales.

ACNUR México también depende cada vez más de las intervenciones de ayuda en efectivo (CBI, por sus siglas en inglés) para abordar las necesidades básicas inmediatas, y presta mayor atención a la inclusión de las PoC en los sistemas nacionales de protección social. Las CBI están completamente integradas a la estrategia más amplia de protección y soluciones, y se brindan para satisfacer una gran variedad de necesidades, incluida la inscripción escolar o la educación obligatoria, programas de educación acelerada para la certificación de educación primaria y secundaria, programas de alfabetización, revalidación/reconocimiento de títulos emitidos en el país origen, examen de bachillerato, apoyo a la educación terciaria, formación profesional y certificación de competencias. Del mismo modo, se otorga dinero en efectivo como parte del programa de reubicación antes mencionado, es decir, hasta que los participantes reciban una oferta de trabajo y encuentren alojamiento. También se aprovechan las CBI para promover la inclusión financiera a través de la vinculación con actores clave del sector bancario.⁷

Fuentes de los datos

El análisis que se presenta en esta nota se basa principalmente en microdatos a nivel de los hogares obtenidos a partir de una encuesta realizada por el ACNUR e *Innovations for Poverty Action* (IPA). La recopilación de datos se llevó a cabo en dos rondas de encuestas entre febrero y septiembre de 2021 utilizando los datos de registro del ACNUR – proGres – como marco de muestreo. Como tal, la muestra puede considerarse representativa de las PoC registradas por ACNUR, aunque no necesariamente representativa de toda la población desplazada en México. Teniendo en cuenta que es más probable que los hogares vulnerables soliciten asistencia y, por lo tanto, se registren, es probable que nuestra muestra produzca estimaciones más bajas en relación con el bienestar socioeconómico y, por lo tanto, ayude a nutrir las políticas dirigidas a las personas más necesitadas. Además, se generó una muestra de la comunidad de acogida con un enfoque de marcación de dígitos aleatorios en el mismo estado que la muestra de PoC, lo que permitió comparar los grupos.

En la primera ronda de la encuesta telefónica, se entrevistó a 1.220 PoC y 1.142 hogares de la comunidad de acogida en tres regiones meta: la Ciudad de México, el corredor industrial Norte y centro, y la zona fronteriza al sur.⁸ En la segunda ronda, se volvió a contactar con éxito a 701 PoC y 517 hogares de la comunidad de acogida, lo que permitió contar con un conjunto de datos de panel para explorar el impacto de la pandemia en esta población vulnerable a lo largo del tiempo.⁹ De las PoC encuestadas originalmente:

⁷ ACNUR (2020). <https://www.refworld.org/es/docid/6178ac084.html> | Estrategia para fortalecer los medios de vida en las Américas.

⁸ Tanto en el corredor industrial del norte como en la zona fronteriza del sur, se incluyeron en el marco de muestreo a lugares específicos con una proporción conocida de personas venezolanas desplazadas en el extranjero, incluidos los estados de Nuevo León y Quintana Roo.

⁹ Todas las estimaciones de la segunda ronda incluyen ponderaciones posteriores a la estratificación para ajustar la deserción diferencial. La deserción entre rondas se debe en gran medida a las bajas tasas de respuesta entre los encuestados en las áreas urbanas, incluida principalmente la Ciudad de México, lo que corresponde a los ejercicios anteriores de recopilación de datos en este contexto. Para conocer más detalles, consultar la [encuesta RECOVR de IPA](#).

533 son venezolanas, 486 hondureñas, 179 salvadoreñas y las 22 restantes son cubanas, colombianas, guatemaltecas o peruanas. Para efectos del análisis comparativo, excluimos estas otras 22 PoC y analizamos exclusivamente la comunidad de acogida, las PoC venezolanas, hondureñas y salvadoreñas.

La herramienta de la encuesta fue diseñada de acuerdo con el cuestionario del Banco Mundial para sus [Encuestas Telefónicas de Alta Frecuencia](#) (HFPS, por sus siglas en inglés) que se aplicaron entre las poblaciones nacionales de la región de América Latina y el Caribe. En México, el Banco Mundial llevó a cabo una primera fase de las Encuestas Telefónicas de Alta Frecuencia en tres rondas entre mayo y agosto de 2020¹⁰, y el Banco Mundial junto con el PNUD realizaron una segunda fase de encuestas entre mayo y julio de 2021.¹¹ Si bien las comparaciones directas son limitadas debido al lapso y las restricciones asociadas, las tendencias generales a lo largo del tiempo entre la muestra nacional de las HFPS y la muestra de las personas de interés de este análisis, son informativas y se incluyen cuando corresponde.

Experiencias relacionadas con la salud y acceso a los servicios

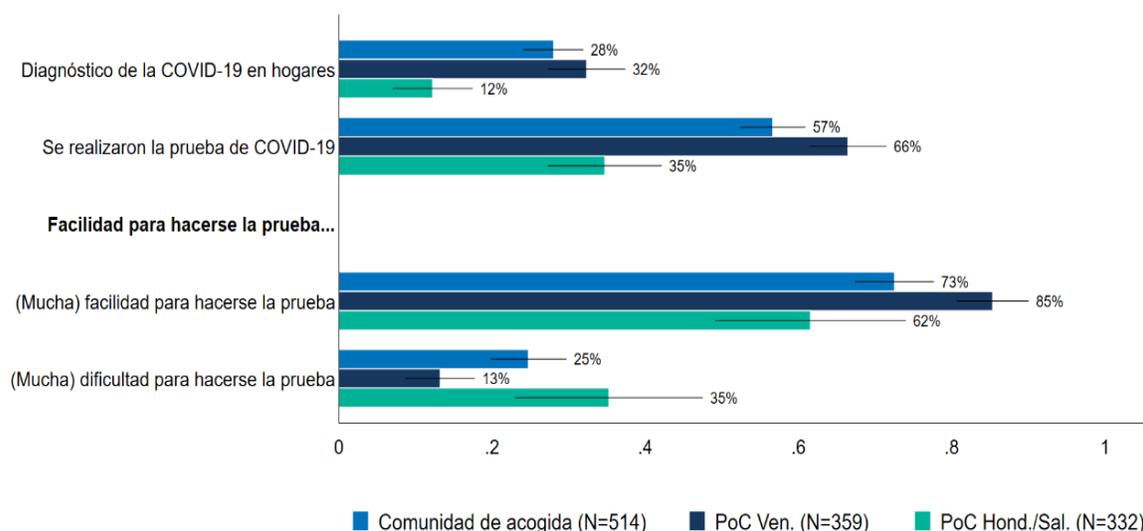
Como en todos los países de la región, la pandemia ha provocado graves trastornos en la vida cotidiana de México. A enero de 2022, el número acumulado de casos oficialmente confirmados superaba los 4 millones, lo que representaba alrededor del 3% de la población total.¹² En nuestra encuesta telefónica, el 15 % de los hogares encuestados ha tenido al menos un diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, como ilustra el gráfico 2, se han diagnosticado muchos menos hogares de PoC hondureñas y salvadoreñas (12%) en relación con la comunidad de acogida (28%) y los hogares de PoC venezolanas (32%). Esto puede explicarse por el hecho de que las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas son mucho menos propensas a informar el haberse realizado, al menos, una prueba de COVID-19 en el último año, y es más probable que digan que hacerse la prueba es difícil, lo que refleja su concentración en la zona del sur, generalmente más pobre, donde el acceso a los servicios de salud y, por lo tanto, a las pruebas, es menor. Por otro lado, las personas encuestadas venezolanas se concentran principalmente en entornos urbanos (por ejemplo, en la Ciudad de México, Monterrey y Cancún), donde la exposición a la COVID-19, así como el acceso a los lugares para realizarse pruebas, es significativamente mayor.

¹⁰ Consultar la [Biblioteca de Microdatos del Banco Mundial](#) (disponible en inglés) para obtener más detalles.

¹¹ PNUD (2021). [Una recuperación desigual: Tomando el pulso de América Latina y el Caribe después de la pandemia.](#)

¹² Roser, M., et al. (2021). [“Coronavirus Pandemic \(COVID-19\)”](#) (disponible en inglés). Recuperado el 16 de diciembre de 2021. N.B.: Las pruebas limitadas y los desafíos en la atribución de la causa de muerte significan que el número de casos confirmados y muertes es probablemente menor que el número real de casos y muertes por COVID-19.

Gráfico 2 Diagnóstico y pruebas de detección de COVID-19 (ronda 2)



Comportamiento, vacunación y conocimiento sobre COVID-19

En marzo de 2021, casi todas las personas encuestadas reportaron que siempre habían usado cubrebocas al salir de casa y en lugares públicos en los siete días previos a la enumeración, y no hay diferencia entre las personas encuestadas de la comunidad de acogida y las PoC. Además, el 74% de la muestra dice que evita las reuniones grandes y las multitudes por completo¹³, aunque esa cifra es ligeramente más baja para las PoC hondureñas y salvadoreñas (71%) que las personas encuestadas de la comunidad de acogida (84%) y las PoC venezolanas (89%). A modo de comparación, el 87% de las personas encuestadas nacionales de la encuesta HFPS 2020 del Banco Mundial reportó que evitaba grupos de 10 o más personas, en consonancia con la muestra de la comunidad de acogida y destaca que no ha habido muchos cambios con el paso del tiempo con respecto al comportamiento personal.

Además, el conocimiento de las personas encuestadas sobre las diferentes medidas de mitigación es, en gran medida, uniforme entre los dos grupos de PoC separados y la comunidad de acogida. Aún así, las PoC hondureñas y salvadoreñas tienen entre 16 y 18 puntos porcentuales (en lo sucesivo “pp”) menos de probabilidad en relación con los otros dos grupos de decir que están conscientes del distanciamiento social para prevenir la transmisión, lo que nos puede indicar la necesidad de comunicar mensajes más específicos a este grupo. Al mismo tiempo, las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas están significativamente menos preocupadas por el contagio de COVID-19.

El gráfico 3 ilustra cómo las tres fuentes de información más confiables sobre COVID-19 entre las PoC encuestadas son la televisión, las redes sociales y el ministerio de salud. Otras fuentes de información son: ACNUR (13%), Gobierno nacional (11%), radio (7%), la OMS (6%) y amistades/familiares (3%). En los tres

¹³ México tiene un [sistema de control de semáforos](#) a nivel subnacional, lo que significa que algunos estados pueden imponer restricciones menores o mayores para influir en el comportamiento de control de la pandemia dependiendo de la ubicación geográfica.

grupos, es más probable que los hogares de la comunidad de acogida dependan de la televisión y la radio en comparación con los otros dos grupos, mientras que la población venezolana prefiere al gobierno nacional, el ministerio de salud y las redes sociales en relación con los otros dos grupos. Alternativamente, es más probable que las PoC hondureñas y salvadoreñas citen al ACNUR como una fuente confiable de información.

Gráfico 3 Fuentes de información sobre COVID-19 consideradas confiables

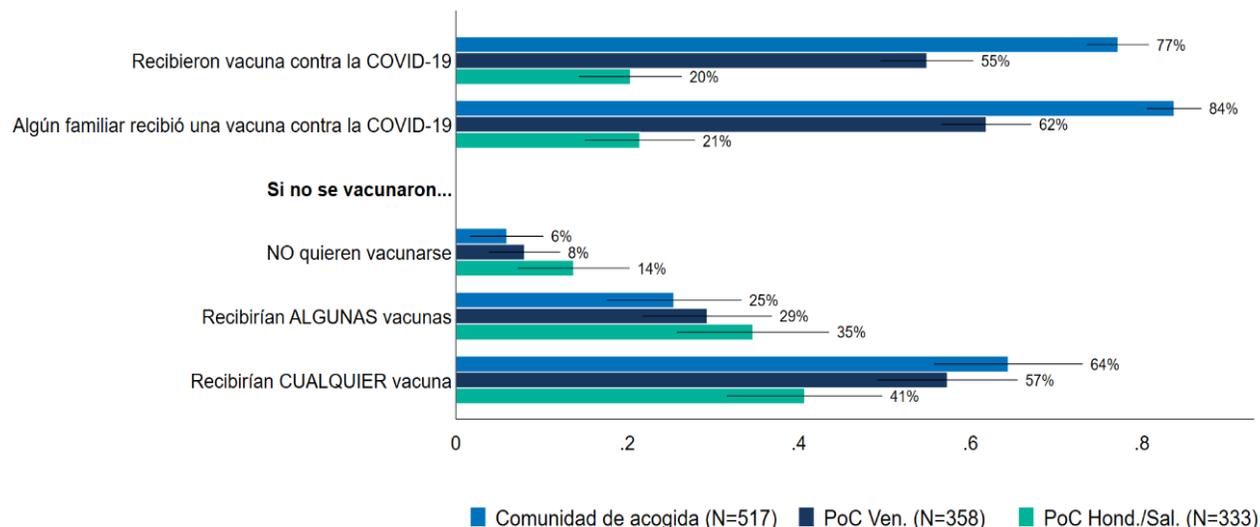


Para la segunda ronda realizada en agosto/septiembre de 2021, el número de PoC encuestadas que respondieron haber recibido una vacuna COVID-19 es mucho menor en comparación con la comunidad de acogida (gráfico 4). En particular, las PoC hondureñas y salvadoreñas tienen entre 35 y 55 pp menos probabilidad de informar por cuenta propia el haber sido inmunizadas en relación con los otros dos grupos. Si bien, en principio, todos los adultos mayores de 18 años calificaban a partir de julio de 2021, esta admisibilidad reportada en los subgrupos no es uniforme, ya que solo alrededor de la mitad de las PoC hondureñas y salvadoreñas reportaron cumplir con los requisitos en comparación con más de las tres cuartas partes de la población encuestada de Venezuela y de la comunidad de acogida. Por lo tanto, la diferencia en las tasas de vacunación puede explicarse parcialmente por la distribución de edad generalmente más joven de la población hondureña y salvadoreña en nuestra muestra en relación con los otros dos grupos, y la falta de información sobre si satisfacían los requisitos o no. Asimismo, puede deberse en parte a su concentración en el sur, donde la capacidad estatal y, por lo tanto, el acceso a los servicios de salud están más limitados en general en comparación con otras partes del país. Sin duda, existen disparidades geográficas evidentes en cuanto a los índices de vacunación, inclusive para los nacionales, ya que los estados del sur están rezagados con respecto a los estados fronterizos del norte a los que se les prestó más atención en las primeras etapas del Plan Nacional de Vacunación.¹⁴

Aún así, una vez que se tienen en cuenta las diferencias en la admisibilidad reportada, queda una diferencia de 20-30 pp entre las PoC que cumplen con los requisitos y aquellas que han tomado medidas para recibir una vacuna, tales como registrarse. Es posible que parte de esto se explique debido a la incertidumbre respecto a ciertas vacunas que se encuentran disponibles. El gráfico 4 ilustra la probabilidad de que las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas mencionen que no se pondrán ninguna vacuna o solo algunas vacunas en relación con los otros dos grupos. De hecho, es menos probable que las PoC hondureñas y salvadoreñas creen que las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces, aunque otras de las razones que se dieron para no querer vacunarse incluyen la falta de tiempo y que no les preocupa el virus. De igual forma, es posible imaginar que una persona no tiene la intención de permanecer en su ubicación actual, tal como se cree que es el caso de muchas personas refugiadas y migrantes que se encuentran en el sur, lo que incide en su decisión de ir a vacunarse, particularmente cuando se necesitan varias dosis en un periodo prolongado. Independientemente de esto, la brecha evidente entre los índices de vacunación entre las PoC y la comunidad de acogida indica que una campaña de mensajes más enfocada a estos grupos podría ser eficaz para elevar los niveles de inmunización.

¹⁴ Kane Jiménez y Adrienne Gandy (2022). "[Mexico's Vaccine Supply and Distribution Efforts](#)", publicado el 4 de octubre de 2021 (disponible en inglés).

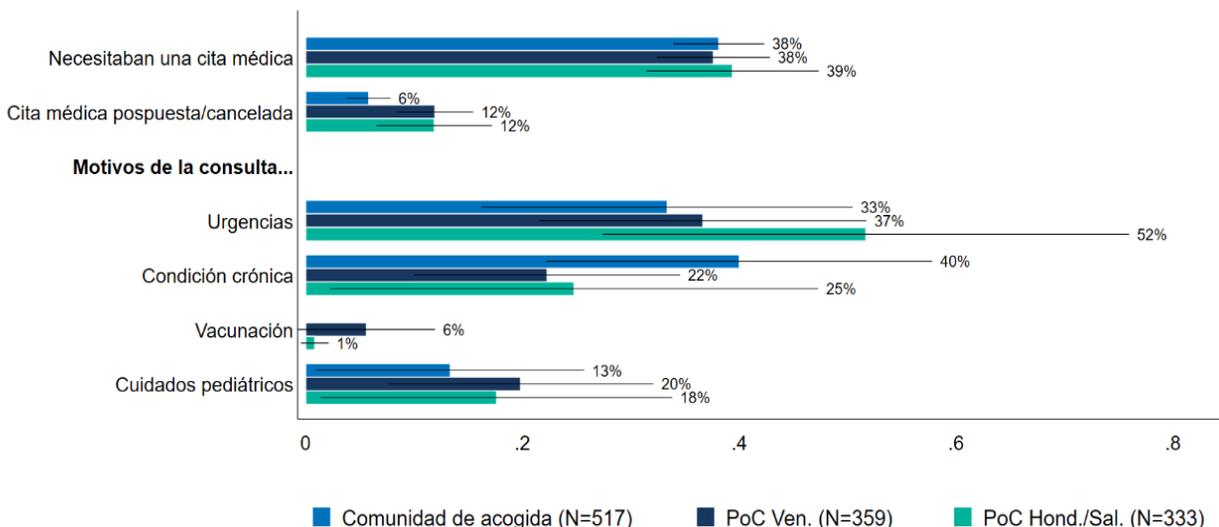
Gráfico 4 Vacunación (ronda 2)



Acceso a la salud y la educación

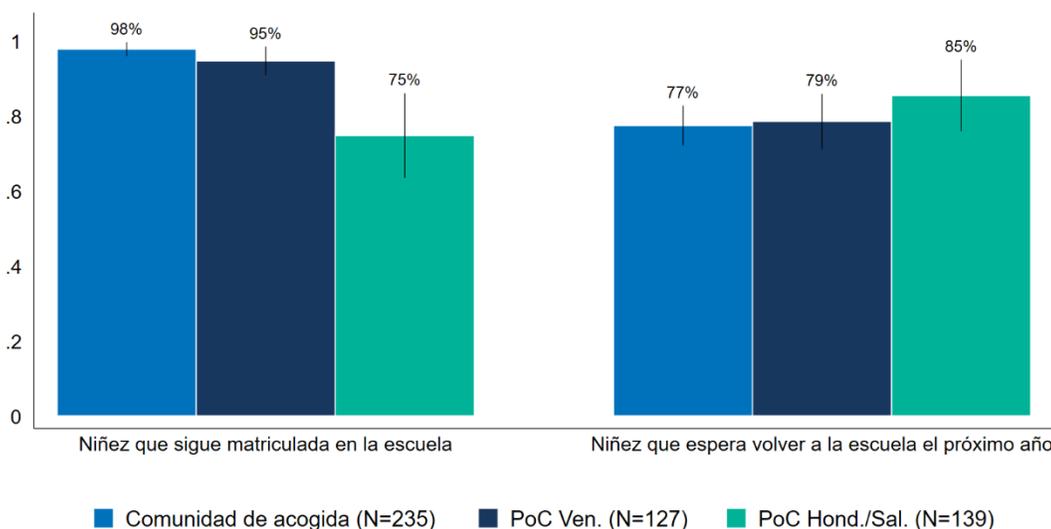
Una de las principales preocupaciones de la pandemia y las restricciones posteriores ha sido el acceso limitado a los servicios básicos. El gráfico 5 ilustra cómo una proporción similar de personas encuestadas de los tres grupos mencionó que en su hogar se requirió una consulta médica entre julio y septiembre. Sin embargo, de éstos, el 12% de personas venezolanas, hondureñas y salvadoreñas tuvieron que retrasar o cancelar la cita frente al 6% de nacionales mexicanos. Además, es más probable que las personas hondureñas y salvadoreñas busquen atención urgente como resultado de una emergencia de salud, lo que hace que cualquier demora o cancelación resulte aún más costosa. De manera similar, los hogares hondureños y salvadoreños reportaron un menor acceso a medicamentos cuando los necesitaron en comparación con los hogares de acogida y venezolanos. Por último, es mucho menos probable que las PoC encuestadas y las venezolanas en particular, crean que el gobierno brinda atención médica sin discriminación, lo que indica su propia percepción del acceso limitado a los servicios de salud.

Gráfico 5 Acceso a los servicios de salud (ronda 2)



En cuanto a la educación, los cierres de escuelas representaron una afectación importante para los hogares con niñas y niños en edad escolar. Sin embargo, para las niñas y niños inscritos en marzo de 2020, hay poca evidencia de deserción entre las PoC hondureñas y salvadoreñas, tal como se ilustra en el gráfico 6. Aunque ese mismo grupo también tiene una expectativa ligeramente mayor de regresar a la escuela el próximo año, una parte importante de las niñas y niños hondureños y salvadoreños siguen en riesgo de abandonar el sistema educativo de forma permanente. Además, se percibe que la calidad de la escuela es mucho peor desde que comenzó la pandemia y se aplicó el cierre de las escuelas. Cerca de la mitad de todas las personas encuestadas consideran que la calidad de la escuela era mala o muy mala en agosto de 2021, en comparación con solo un 10% antes de marzo de 2020. Los desafíos en torno al aprendizaje a distancia son probablemente la razón principal, en particular para los hogares hondureños y salvadoreños que reportan menos acceso a internet y otros recursos informáticos como las computadoras portátiles. Como resultado, los hogares hondureños y salvadoreños prefieren la comunicación con las escuelas y maestros a través de otros medios como WhatsApp, mientras que los hogares venezolanos y de la comunidad de acogida probablemente prefieren las aplicaciones de enseñanza en línea a las que normalmente se accede a través de una computadora.

Gráfico 6 Matrícula escolar (ronda 2)



Medios de vida e inseguridad financiera

Si bien los impactos de la pandemia en la salud tienen una importancia de primer orden, la pandemia también ha tenido un gran costo económico. Según las últimas cifras de pobreza de México, 3,8 millones de personas mexicanas cayeron por debajo de la línea nacional de pobreza adicionalmente en 2020, para llegar a un total de casi 56 millones, o el 44% de la población.¹⁵ Las cifras más recientes muestran cómo la tasa de desempleo se ha recuperado modestamente, actualmente se estima en 4%, pero aún no llega a los niveles previos a la pandemia.¹⁶ En este contexto, las dos rondas de encuestas telefónicas arrojaron luz sobre cómo las PoC del ACNUR se han visto afectadas por la pandemia con respecto a los medios de vida y la inseguridad financiera.



Empleo y fuentes de ingresos

Cerca de las tres cuartas partes de todas las personas encuestadas contaban con empleo en la segunda ronda de la encuesta, lo que refleja un aumento de 5 pp desde la primera ronda (72% frente al 67%). Sin embargo, la tabla 1 ilustra la diferencia considerable entre la comunidad de acogida y las personas venezolanas en relación con las PoC hondureñas y salvadoreñas. Para la segunda ronda, el 80% de las personas venezolanas tenían empleo, porcentaje que es comparable con el de las personas encuestadas de la comunidad de acogida, pero que representa 9 pp más que la población encuestada hondureña y salvadoreña. Este índice más bajo en las PoC hondureñas y salvadoreñas probablemente refleja la carencia relativa de oportunidades que hay en el sur del país, donde se da una alta concentración de esta población, lo que respalda la aplicación de un enfoque de desarrollo por zonas, así como la reubicación de las PoC a economías locales más dinámicas.

¹⁵ CONEVAL (2021). [Medición de la pobreza](#).

¹⁶ INEGI (2022). [Empleo y ocupación](#).

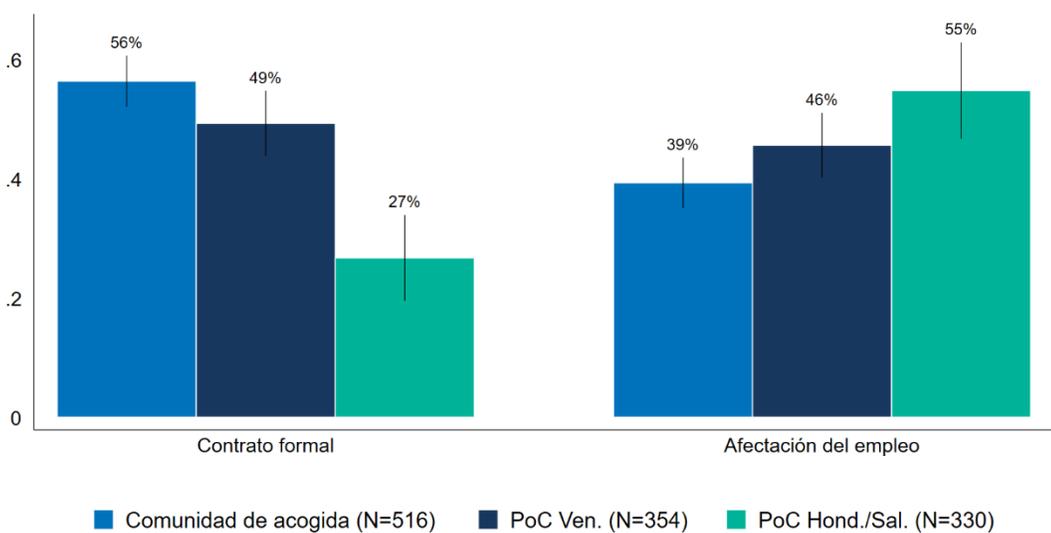
Tabla 1 Población ocupada (%)

	Ronda 1	Ronda 2
Comunidad de acogida	76.6	81.8
Personas de Interés (PoC) de Venezuela	72.7	79.6
Personas de Interés (PoC) de Honduras/El Salvador	66.1	71.1
Total	67.4	72.2

Nota: la población ocupada está compuesta por las personas que se encontraban trabajando en la semana anterior a la entrevista; incluye a las personas que tienen un empleo remunerado o ejercen actividad independiente, que no lo realizaron en la semana de referencia, pero tienen garantía de retornar al trabajo

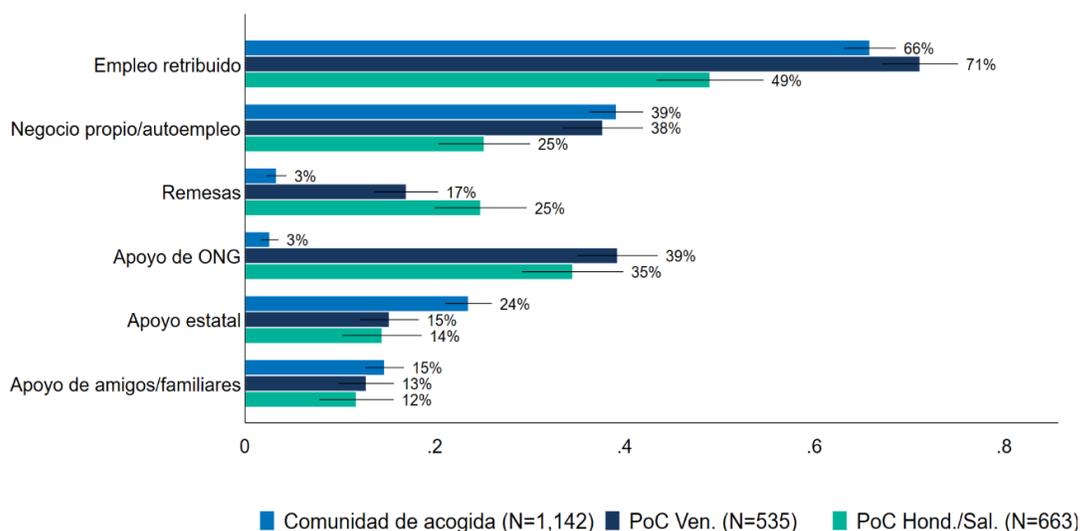
Es menos probable que las PoC encuestadas tengan un empleo formal y sus garantías asociadas, como el acceso a la seguridad social, en comparación con la comunidad de acogida (gráfico 7). En particular, las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas tienen mucha menor probabilidad de tener un empleo en el sector formal, lo que las pone en mayor riesgo de padecer condiciones laborales perjudiciales y reduce en gran medida su acceso al sistema de seguridad social basado en el empleo. En áreas rurales, tanto las personas encuestadas de la comunidad de acogida como las PoC tenían aproximadamente 20 pp de menor probabilidad que las personas encuestadas de áreas urbanas de tener un contrato de trabajo formal, lo que pone en evidencia la prevalencia de la informalidad fuera de las ciudades. Además, más de la mitad de todas las personas encuestadas (el 55% de las hondureñas y salvadoreñas, el 46% de las venezolanas y el 39% de las comunidades de acogida) sufrió una afectación en el empleo formal desde que comenzó la pandemia, lo que incluye la suspensión del contrato laboral, la reducción de la jornada de trabajo o la pérdida de empleo de un miembro del hogar. Esto es mucho mayor que el 25% de las personas encuestadas nacionales que reportaron haber perdido su trabajo en mayo/junio de 2020 en la encuesta HFPS del Banco Mundial, e indica la importancia de recopilar datos a lo largo del tiempo durante las crisis económicas para evaluar las consecuencias a largo plazo de la pandemia sobre las actividades que generan ingresos en los hogares, así como el impacto pronunciado en las personas refugiadas y migrantes en comparación con las personas nacionales.

Gráfico 7 Empleo formal y afectación del empleo (ronda 2)



Tanto los hogares de las PoC como los de la comunidad de acogida reciben ingresos de una amplia variedad de fuentes y 3 de cada 5 reportaron contar con múltiples fuentes para amortiguar la pérdida de empleo. El gráfico 8 ilustra cómo los salarios y los negocios/empleo por cuenta propia son las fuentes primarias para la comunidad de acogida, así como para los hogares venezolanos, mientras que los hogares hondureños y salvadoreños tienen significativamente menos probabilidades de haber ganado salarios o ingresos de negocios/empleo por cuenta propia. Además, todos los hogares de las PoC dependen en gran medida del apoyo de las ONG, fundaciones o iglesias. Se muestra que las remesas también son una fuente importante de ingresos para las PoC, especialmente para los hogares hondureños y salvadoreños.

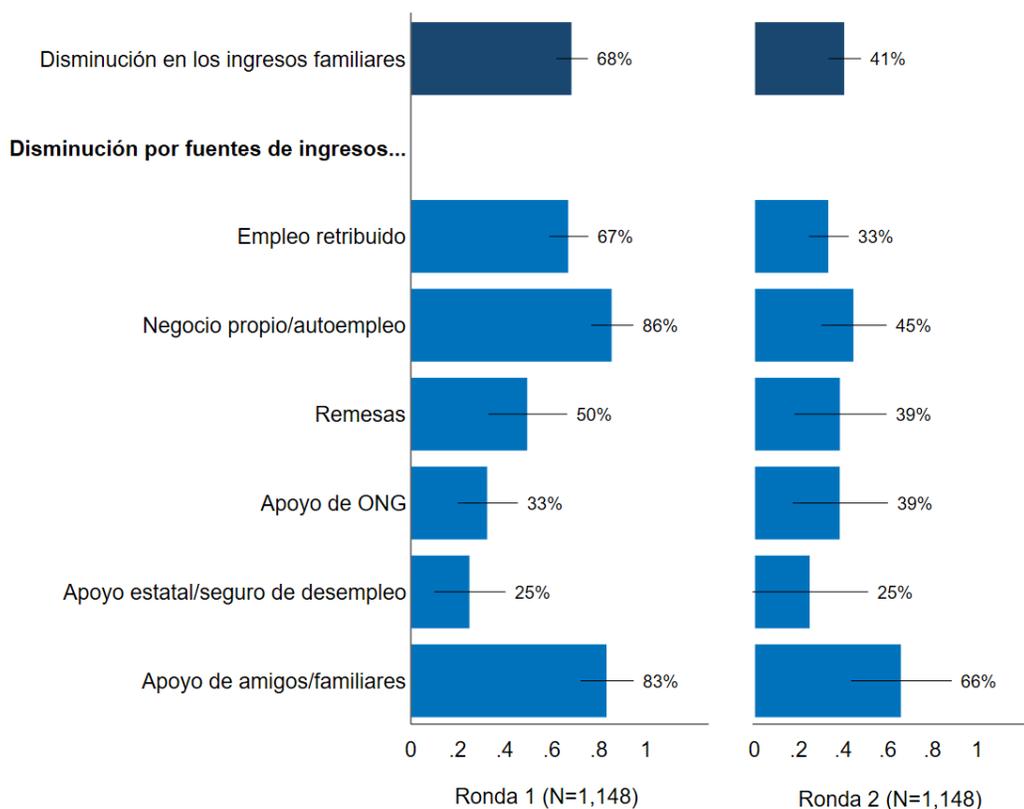
Gráfico 8 Fuentes de ingresos en los últimos 12 meses (ronda 1)



El gráfico 9 destaca la pérdida de ingresos desde que se implementaron por primera vez las medidas relacionadas con la pandemia en marzo de 2020. En la primera ronda, el 68% de los hogares reportó una reducción en el ingreso familiar total en comparación con la época previa a la COVID-19, mientras que otro 41% reportó una reducción en la segunda ronda, en comparación con la ronda anterior. La primera ronda es comparable, pero ligeramente más alta que el hallazgo de la HFPS del Banco Mundial en 2020 donde el 60% de los hogares nacionales mencionan una reducción en los ingresos totales en los primeros meses de la pandemia cuando los cierres de negocios fueron más frecuentes. Esto destaca los desafíos para recuperar los niveles de bienestar previos a la pandemia, incluso después de la reapertura gradual de la economía a partir de julio de 2020, en particular para aquellos hogares que dependen del trabajo por cuenta propia, que a menudo se desarrolla dentro del sector informal.

Además, las diferencias entre los subgrupos ayudan a ilustrar cómo los hogares de las PoC se vieron más afectados durante las etapas iniciales de la pandemia y también se recuperaron más lentamente. Más en específico, los hogares de las PoC tienen 14 pp de mayor probabilidad de reportar una pérdida de ingresos en la primera ronda desde tiempos anteriores a la COVID en comparación con la comunidad de acogida (69% frente al 55%), y 11 pp de mayor probabilidad de reportar una pérdida de ingresos en la segunda ronda respecto a la anterior (41% frente al 30%). Las remesas en particular siguen estando bastante limitadas para las PoC: el 39% mencionó que recibió menos en la segunda ronda, en comparación con solo el 9% de las personas encuestadas de la comunidad de acogida.

Gráfico 9 Disminución de ingresos desde el comienzo de la pandemia/ronda previa



Inseguridad financiera

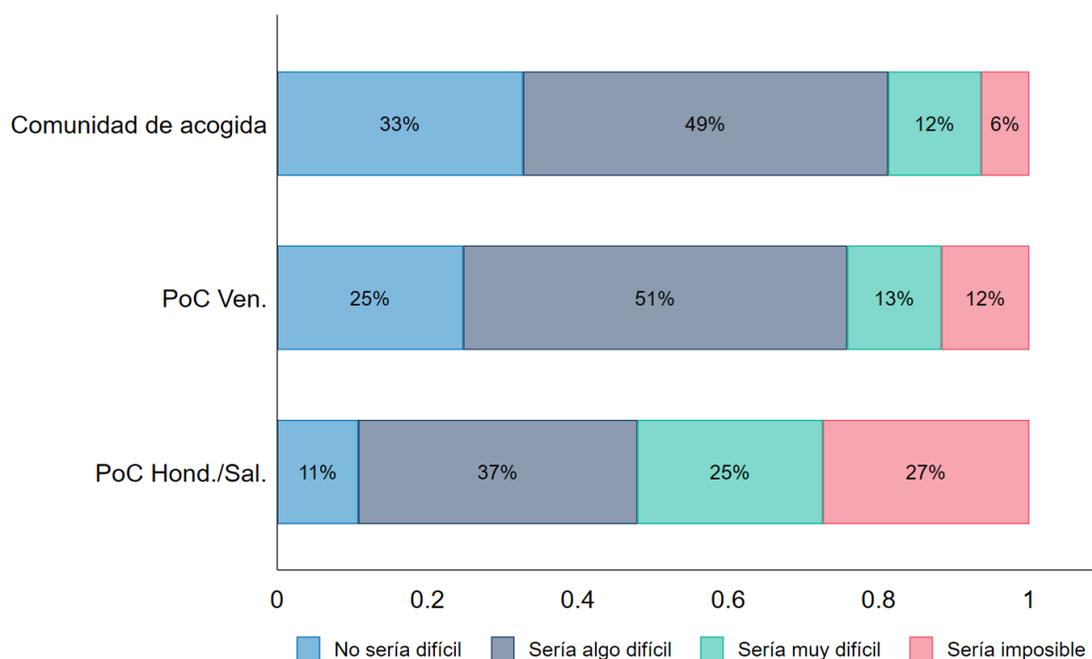
Los datos ilustran cómo el nivel de preocupación por el impacto económico de la pandemia sigue siendo alto. La mayoría de las personas encuestadas aún considera que la pandemia es una amenaza para la situación financiera del hogar, las personas encuestadas venezolanas son más propensas a informar que se sienten "algo o muy amenazadas" en comparación con la comunidad de acogida y las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas (78% frente al 67% y 57%, respectivamente). Curiosamente, en la segunda ronda, las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas son las menos propensas, de los tres grupos, a sentir que la pandemia es una amenaza para su situación económica, lo que resulta contradictorio con la evidencia previa que señala que tienen peores condiciones en cuanto a los resultados del mercado laboral. Además, esta cifra para la comunidad de acogida es comparable a la encuesta HFPS del Banco Mundial en 2020, lo que indica que la ansiedad debido a las dificultades económicas persiste con el tiempo.

Parte de esta preocupación se debe al nivel de inseguridad financiera que enfrentan los hogares de las personas refugiadas y migrantes, a menudo a la luz del riesgo de pérdida de empleo ilustrado anteriormente. Las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas reportaron tener un acceso mucho menor a los servicios financieros que las venezolanas y las personas de la comunidad de acogida en cuanto a que no tienen una cuenta bancaria ni de ahorros móvil: el 82% frente al 24% y el 44%, respectivamente. La falta de documentación es una barrera fundamental para la inclusión financiera de las PoC encuestadas, de las cuales, aproximadamente la mitad

mencionó no tener una cuenta porque carecen de la documentación necesaria. Por lo tanto, es mucho más probable que las personas venezolanas tengan acceso a instrumentos financieros considerando que la mayoría llegó a México con pasaporte.

También medimos la inseguridad financiera de un hogar ante una emergencia. Al preguntar a las personas encuestadas si podrían reunir \$1.514 MXN (unos \$70 dólares estadounidenses) en fondos de emergencia en los próximos 30 días, alrededor de dos tercios comenta que sería "muy difícil" o "imposible". En los subgrupos, las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas son considerablemente más propensas a decir que sería "muy difícil" o "imposible" en relación con los otros dos grupos (gráfico 10). Las PoC encuestadas son más propensas a citar las redes sociales como la fuente esperada de dichos fondos en comparación con la población de la comunidad de acogida, aunque las PoC venezolanas también son más propensas a decir que el dinero proviene del trabajo. Además, las mujeres encuestadas reportan que les resultaría más difícil obtener fondos de emergencia en los próximos 30 días, y se observa que la brecha de género es mucho mayor para las personas de la comunidad de acogida en relación con las PoC (aprox. 25 pp de diferencia para la población de acogida frente a 10 pp para los grupos de PoC).

Gráfico 10 Capacidad de conseguir dinero para enfrentar una emergencia en 30 días (ronda 2)



Más allá de la supuesta emergencia, el 56% de todas las PoC encuestadas en comparación con el 42% de las personas encuestadas de la comunidad de acogida reportan que se ven obligadas a agotar sus ahorros o a depender de otros para satisfacer las necesidades diarias básicas, como la alimentación y la atención médica, en el periodo entre las dos rondas de encuestas. No hay diferencia significativa entre los hogares venezolanos y los hondureños y salvadoreños. El método más común para enfrentar un desafío de este tipo incluía pedir dinero prestado (25%), solicitar ayuda a amigos y familiares (14%) y recurrir a los ahorros (11%). Las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas son particularmente más propensas a endeudarse por no poder satisfacer las necesidades básicas diarias, así como por haber buscado el apoyo de amistades y familiares.

Inseguridad alimentaria y asistencia

Como era de esperarse teniendo en cuenta el impacto económico de la pandemia, la pérdida de actividades generadoras de ingresos ha colocado a muchos hogares en una situación precaria. Para las poblaciones desplazadas que ya dependen en gran medida de la economía informal, las medidas para frenar la propagación de la enfermedad han tenido un impacto desproporcionado en los medios de vida y han provocado graves dificultades para satisfacer las necesidades básicas que requieren asistencia específica.



Inseguridad alimentaria

Al preguntar a las PoC encuestadas sobre tres alimentos esenciales para su hogar, la Tabla 2 muestra que el acceso a esos alimentos ha aumentado alrededor de 6 pp en todas las rondas, lo que refleja una modesta mejora en el mercado local. Los alimentos más comunes mencionados son los granos (por ejemplo, arroz), las legumbres (por ejemplo, frijoles) y las proteínas (por ejemplo, pollo). Sin embargo, siguen existiendo diferencias considerables entre los grupos, ya que las personas hondureñas y salvadoreñas tienen entre 16 y 22 pp de mayor probabilidad de reportar dificultades para comprar o abastecerse de esos artículos esenciales en comparación con las personas venezolanas y la población de la comunidad de acogida. De hecho, en la segunda ronda, las personas venezolanas están en su mayoría a la par de las de la comunidad de acogida. Considerando que la gran mayoría de las personas encuestadas dice que la falta de dinero es la razón principal para el acceso limitado, esto es un claro reflejo del mejor perfil socioeconómico que poseen las personas venezolanas en comparación con las PoC hondureñas y salvadoreñas, así como la concentración de estas últimas en el área del sur que es generalmente más pobre.

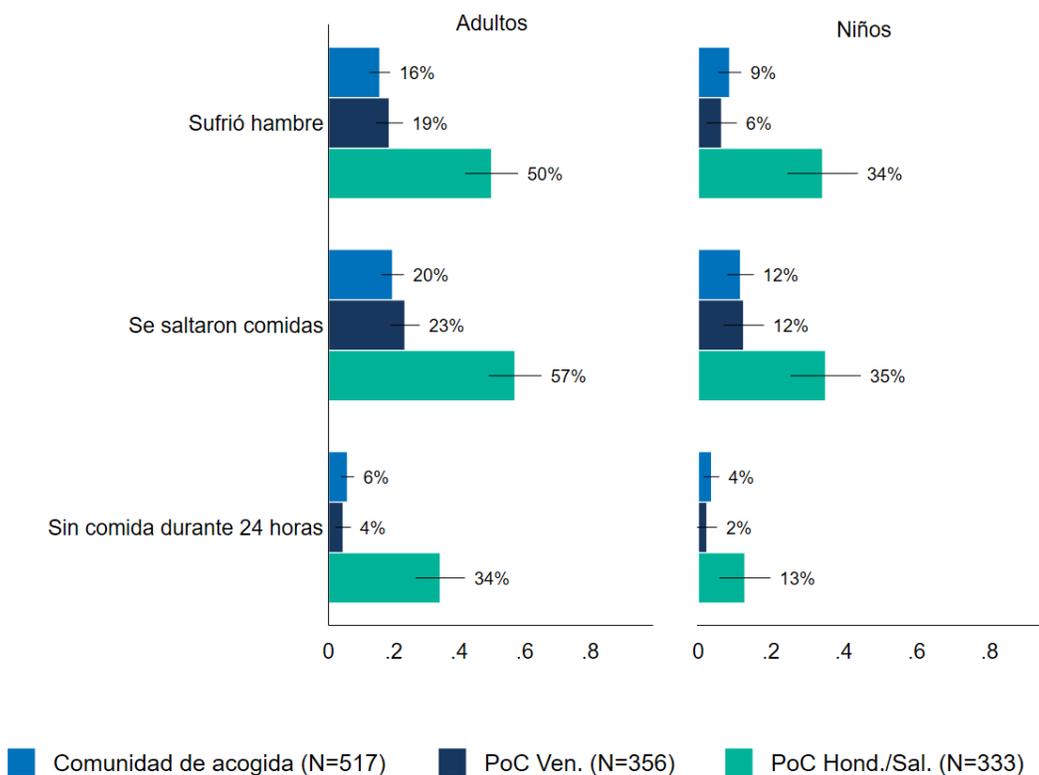
Tabla 2 Capacidad de adquirir/almacenar tres tipos de alimentos esenciales (%)

	Ronda 1	Ronda 2
Comunidad de acogida	85.3	89.6
Personas de Interés (PoC) de Venezuela	78.5	87.0
Personas de Interés (PoC) de Honduras/El Salvador	62.4	68.4
Total	64.6	70.8

De manera similar que con el acceso limitado a alimentos esenciales, existen grandes disparidades respecto a la inseguridad alimentaria. En general, hay una mejora modesta entre las rondas de la encuesta, la mitad de todas las personas encuestadas todavía reportó que su hogar se quedó sin alimentos en la segunda ronda de la encuesta. Pero esta cifra general aumentó en gran medida por las PoC hondureñas y salvadoreñas, ya que tienen, al menos, 31 pp de mayor probabilidad de reportar que se quedaron sin alimentos en los 30 días anteriores a la encuesta en comparación con las personas encuestadas venezolanas y la población de la comunidad de acogida (54% frente al 23% y 19%, respectivamente). El gráfico 11 ilustra cómo las personas hondureñas y salvadoreñas están en peores condiciones en casi todas las mediciones de inseguridad alimentaria, incluyendo notablemente a la población adulta que se quedó sin alimentos en las últimas 24 horas. En 2020, la encuesta del Banco Mundial aplicada en la población nacional encontró tasas similares de inseguridad alimentaria en las personas adultas en la primera ronda que las de la comunidad de acogida, lo que destaca coherencia entre las dos muestras distintas. Pero también muestra la disparidad entre ciertos grupos vulnerables de personas refugiadas y migrantes, tales como las hondureñas y salvadoreñas en comparación con las nacionales: El 19% se quedó sin alimentos, el 20% se saltó una comida y el 6% pasó un día completo sin comer.

El gráfico 11 también muestra que la inseguridad alimentaria entre las niñas y niños es un problema grave, particularmente en la población hondureña y salvadoreña. Más de 3 de cada 10 personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas reportan que una niña o niño pasó hambre o se saltó una comida en los 30 días previos a la enumeración debido a la falta de dinero u otros recursos, en comparación con menos de 1 de cada 10 de las personas encuestadas venezolanas y de la comunidad de acogida. Lo que es más sorprendente aún, el 13% de las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas reportan a una niña o niño sin comida durante 24 horas en los últimos 30 días, en comparación con el 4% de las personas de la comunidad de acogida y el 2% de las personas venezolanas.

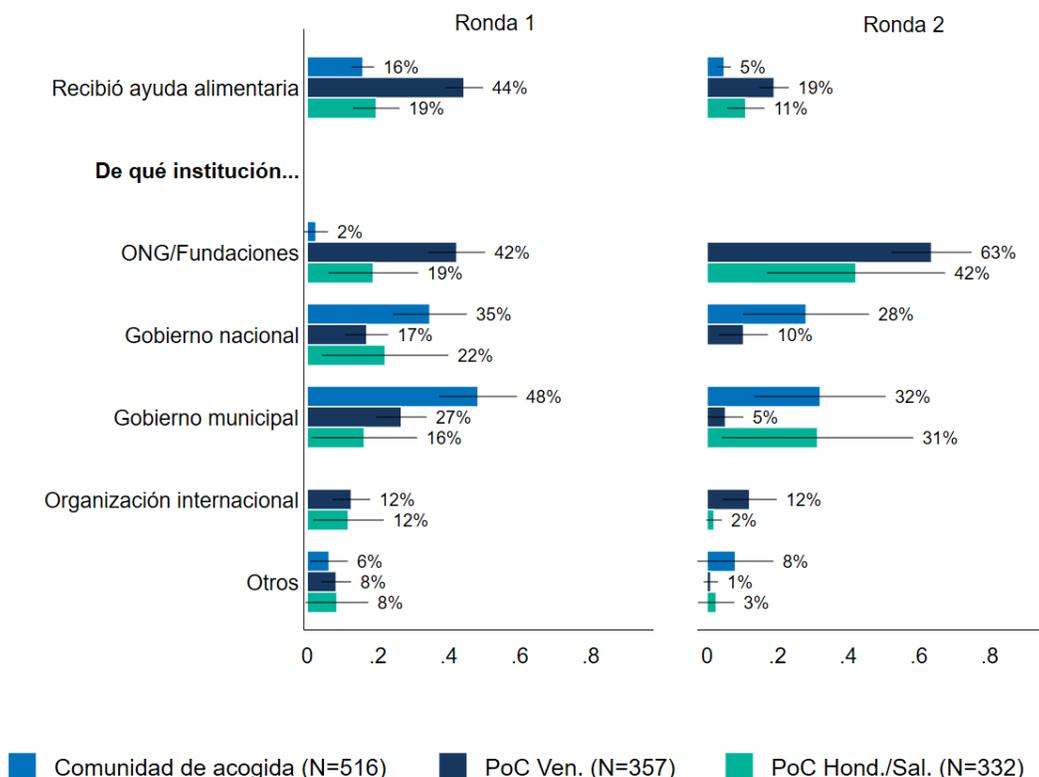
Gráfico 11 Inseguridad alimentaria (ronda 2)




Asistencia

Si se considera el riesgo de inseguridad alimentaria producto de la pandemia, la asistencia alimentaria es fundamental para contrarrestar el hambre. Sin embargo, el gráfico 12 muestra cómo la ayuda alimentaria para las personas de interés, por ejemplo, una comida gratuita o un cupón para intercambiar por comidas, se reduce considerablemente durante las dos rondas de la encuesta. Quizás lo más sorprendente es el hecho de que la asistencia alimentaria es mucho más frecuente para los hogares venezolanos en comparación con los hondureños y salvadoreños, lo que puede contribuir a una seguridad alimentaria relativamente mejor y puede reflejar una estrategia dirigida hacia este grupo, en particular por parte de las ONG, fundaciones y organizaciones internacionales. En la segunda ronda de la encuesta, el apoyo del gobierno nacional es insignificante para las PoC hondureñas y salvadoreñas, aunque parece que los gobiernos municipales brindan un sustituto parcial.

Gráfico 12 Asistencia alimentaria (ambas rondas)

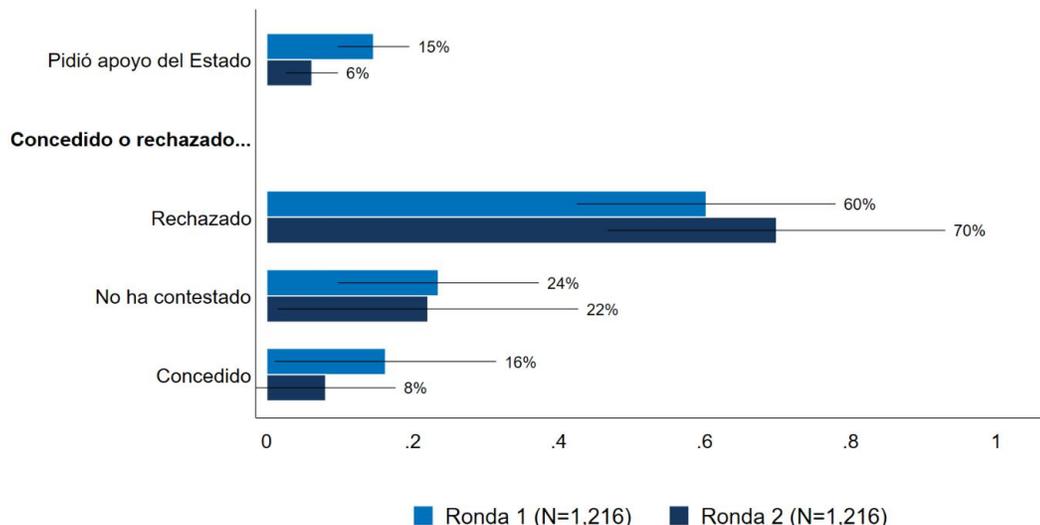


Más allá de la asistencia alimentaria, en la primera ronda, cerca de 1 de cada 4 personas encuestadas reporta que sus hogares reciben ayuda financiera directa en forma de efectivo, cheque o transferencia electrónica. Sin embargo, de nuevo hay una caída notable en la asistencia entre ambas rondas de la encuesta, donde solo el 5% de las PoC informaron haber recibido apoyo monetario en agosto/septiembre. Además, existe una diferencia considerable entre los grupos donde el 36% de las personas encuestadas venezolanas que recibieron asistencia en efectivo en la primera ronda en comparación con el 24% de las PoC hondureñas y salvadoreñas y el 8% de las personas encuestadas de la comunidad de acogida. Esas proporciones caen sustancialmente en la segunda ronda para las PoC en particular, donde el 12% de las personas venezolanas y solo el 5% de las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas reciben apoyo monetario. La cantidad promedio recibida es de alrededor de \$7.000 PHP (unos \$190 dólares estadounidenses), y procede principalmente de las ONG, las organizaciones internacionales y el gobierno nacional, aunque este último brindó un apoyo más limitado en la segunda ronda de la encuesta. En comparación, la encuesta del Banco Mundial en 2020 encontró que entre el 4% y el 9% de los hogares nacionales habían recibido algún tipo de asistencia monetaria, según la ronda, lo que generalmente coincide con nuestra muestra de la comunidad de acogida.

El gráfico 13 ilustra cómo en la segunda ronda una menor cantidad de las PoC encuestadas reporta haber solicitado apoyo estatal desde la primera ronda en comparación con los seis meses anteriores a la primera ronda. Entre el 60% y el 70% de las solicitudes de apoyo estatal son rechazadas, y la gran mayoría de las otras aún están pendientes. Las personas encuestadas de la comunidad de acogida son ligeramente más propensas a solicitar apoyo que las PoC, mientras que las PoC hondureñas y salvadoreñas informaron tasas de rechazo considerablemente más altas. Entre las PoC, las venezolanas tienen posibilidades considerablemente más altas

de éxito para recibir apoyo del gobierno, particularmente en la segunda ronda, el 27%, frente al 5% de las personas encuestadas hondureñas y salvadoreñas.

Gráfico 13 Apoyo estatal (ambas rondas)



Reflexiones finales

La crisis provocada por la COVID-19 ha complicado la situación de desplazamiento en México. En la región, en términos más generales, las dificultades asociadas con la inseguridad y los desplazamientos internos a gran escala requieren la participación y el apoyo continuos de los socios humanitarios y para el desarrollo. Del mismo modo, el rápido aumento de las llegadas de personas haitianas, hondureñas, cubanas y venezolanas, entre otros grupos, exige una visión plurianual en la búsqueda de soluciones sostenibles.

Las repercusiones sanitarias y económicas de la pandemia, junto con los efectos de las medidas de mitigación, han supuesto una carga considerable para toda la población, incluyendo las personas de interés del ACNUR. Los *shocks* en la demanda, las restricciones a la circulación y los cierres han contribuido a una pérdida significativa de bienestar económico y han reducido la resiliencia de muchos grupos ya vulnerables. Si bien el ACNUR continúa su proceso de transición de la asistencia en especie a la ayuda en efectivo y la inclusión económica; la crisis de la pandemia, el aumento de los precios de los alimentos y la disminución de los empleos hacen que esa transición sea cada vez más difícil. Los enfoques mixtos, como la ayuda en efectivo y de medios de vida, son necesarios para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas inmediatas al tiempo que se fomenta una mayor autosuficiencia.

En México, la estrategia de reubicación interna también está ayudando a reducir la presión en las comunidades de acogidas ya vulnerables, particularmente en el sur, y contribuye a una mayor inclusión socioeconómica. Llevar a cabo iniciativas adicionales para facilitar la inclusión financiera, inclusive a través del acceso simplificado a documentación tales como permisos de residencia, números de contribuyente y de registro de población, ayudarían a abordar algunos de los desafíos fundamentales que enfrentan las personas de interés del ACNUR en su vida cotidiana.

Más allá de las respuestas específicas del ACNUR y sus socios, la recuperación mundial continúa, pero con una incertidumbre significativa vinculada al acceso a las vacunas, la propagación continua de enfermedades y las interrupciones del suministro. Las perspectivas del mercado laboral para personas trabajadoras poco calificadas y la juventud son relativamente sombrías en comparación con otros grupos demográficos, lo que apunta a una creciente desigualdad y un mayor riesgo de que los hogares caigan por debajo de la línea de pobreza extrema. En México, los impactos negativos de la pandemia continúan propagándose a través de la economía a pesar de que el mercado laboral se ha recuperado parcialmente de lo peor de 2020. No obstante, el país ha seguido ofreciendo asilo a las personas necesitadas y acoge a un número récord de personas solicitantes de asilo, refugiadas y otras de interés del ACNUR. Este rápido aumento en el número de personas que solicitan protección en México subraya la importancia de los enfoques por zonas que benefician tanto a las comunidades de acogida como a las poblaciones desplazadas para lograr soluciones humanitarias y orientadas al desarrollo.

Un componente esencial de cualquier estrategia de recuperación robusta deberá incluir la aplicación de las vacunas en todos los países y para todos los sectores de la sociedad. En la actualidad, alrededor de 120 países, incluido México, se han comprometido a incluir a las poblaciones desplazadas en sus planes nacionales de vacunación. Aumentar ese número para garantizar que todas las personas de interés del ACNUR tengan la opción de recibir una vacuna segura, ayudará a frenar la propagación del virus y minimizará el daño socioeconómico ya infligido a algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo. Del mismo modo, mayores esfuerzos para incluir sistemáticamente a las personas refugiadas y otros grupos de personas de interés en los sistemas nacionales de protección social fortalecidos ayudarán a los hogares vulnerables durante la pandemia de COVID-19 en curso, así como las crisis futuras.

Por último, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad fundamental de contar con datos socioeconómicos oportunos en los contextos de desplazamientos para comprender plenamente las condiciones de las personas que se encuentran bajo la protección del ACNUR y sustentar las respuestas programáticas y políticas adecuadas. El Centro Conjunto de Datos sobre el Desplazamiento Forzado del Banco Mundial y el ACNUR se estableció para abordar estos vacíos de información; su inversión en las encuestas de hogares realizadas durante la pandemia ha sido muy importante para revelar el deterioro de las condiciones tanto de las poblaciones desplazadas por la fuerza como de las poblaciones de acogida, con sus pronunciados retrocesos en el acceso a la salud y la educación, el empleo y los ingresos y signos más lentos de recuperación. Los hallazgos presentados en esta nota construyen la base de conocimientos y proporcionan más evidencia sobre el impacto de la COVID-19 en las poblaciones desplazadas en una región que anteriormente no estaba cubierta.¹⁷

¹⁷ Tanner, J., et al. (2021). [Answering the Call: Forcibly Displaced during the Pandemic](#) (disponible en inglés).